

Estado Anzoátegui

*Libertad de expresión y derecho a la información versus hegemonía comunicacional estatal*¹

Antecedentes y contexto

Este Informe que se presenta a continuación, comprende los casos que han afectado el libre ejercicio de los profesionales de la comunicación social en el primer trimestre del año 2009, tiene lugar en un contexto en el cual el gobierno regional encabezado por Tarek William Saab, del Partido Socialista Unificado (PSUV) adelanta la implementación de la política de “hegemonía comunicacional estatal” promovida por el gobierno nacional.

Cabe precisar que la estrategia de la “hegemonía comunicacional estatal” fue explicitada públicamente por distintos voceros oficiales. En enero de 2007, el entonces vice Ministro de Relaciones Exteriores, William Izarra afirmó que *“nuestro socialismo necesita una hegemonía comunicacional y todas las comunicaciones tienen que depender del Estado como bien público”*.²

Esta propuesta fue explicada y justificada por el Director de *Telesur* y ex Ministro de Comunicación, Andrés Izarra, con posterioridad la cancelación de la concesión a *RCTV*, en los siguientes términos: *“Para el nuevo panorama estratégico que se plantea, la lucha que cae en el campo ideológico tiene que ver con una batalla de ideas por el corazón y la mente de la gente. Hay que elaborar un nuevo plan, y el que nosotros proponemos es que sea hacia la hegemonía comunicacional e informativa del Estado. [...] Nosotros hacemos una propuesta de que sean una serie de medidas en varios ámbitos para construir la hegemonía comunicacional e informativa que permita la batalla ideológica y cultural para impulsar el socialismo”*.³ Más precisamente Izarra planteó: *“Nadie está hablando de eso (pensamiento único)⁴, ni de dictadura mediática. Hegemonía quiere decir que podamos construir las capacidades que permitan convencer, atraer,*

*impulsar una serie de valores e ideas sobre el mundo, a todo el grupo social. [...] En la hegemonía comunicacional va a haber varios niveles: integración de los sistemas de los medios públicos, articulación de un plan estratégico que permita la orientación de esos medios públicos; la creación de un sistema nacional de medios comunitarios y alternativos; el impulso hacia una producción independiente”.*⁵

Esta estrategia gubernamental ha venido implementándose progresivamente por el gobierno nacional y por sus gobernadores aliados, como es el caso de Anzoátegui. A escala nacional la “hegemonía comunicacional estatal” ha significado según Marcelino Bisbal, director del programa de posgrado de Comunicación Social de la Universidad Católica Andrés Bello, que *“la actual plataforma de medios (estatal) no tiene precedentes en la historia política del país y en Latinoamérica ningún gobierno había tenido tantos interés en el asunto y concentrado tal cantidad de unidades comunicacionales en sus manos”.*⁶ Destaca Bisbal que en el aspecto cuantitativo, el sector privado tiene la mayoría de medios, al menos en el caso de la televisión, pero hay canales de alcance nacional que han sido neutralizados, por otro lado se han creado unas 3.000 radios comunitarias, de las cuales solamente 1.300 tenían permiso de habilitación administrativa para poder funcionar, 110 páginas Web financiadas por el gobierno nacional y el control de la CANTV, lo que convierte al Estado en operador y regulador de las telecomunicaciones.

En opinión del sociólogo y analista político Javier Biardeau, quien apoya críticamente al “proceso bolivariano”, es necesario debatir sobre la denominada *“hegemonía comunicacional e informativa del Estado”*, y en ese sentido opina que: *“Las diversas manifestaciones de oposición han acertado al cuestionar la hegemonía del estado en el terreno comunicativo e informativo. Sin embargo, el registro de significación del término hegemonía en estos sectores de oposición nada tiene que ver con Gramsci, y se vincula con la doctrina Betancourt del “hegemon político”.*

*El problema, es que el discurso del gobierno tampoco acierta, ya que para Gramsci, la hegemonía estatal a secas sin pasar a considerar las correlaciones de fuerzas y las coaliciones sociales que conforman una voluntad colectiva nacional-popular de signo socialista, recae en el absurdo de la estadolatría.”*⁷ La preocupación de Bierdeau es clara respecto a advertir sobre que *“La tentación a monopolizar información y flujos comunicacionales es un componente central de la estadolatría”.*⁸

Para Bisbal, el gobierno nacional esta estrategia tiene como objetivo *“convertir a los medios en armas políticas que estén bajo el arbitrio del Estado y que deben ser controlados gubernamentalmente”*, mientras que el profesor de

la UCAB, la necesaria democratización de los medios de comunicación social debe implicar un proceso activo participación de todos los sectores organizados de la sociedad en igualdad de condiciones.

En este contexto, donde por otra parte, la mayoría de los medios de comunicación social privados, convertidos en actores políticos del conflicto nacional, desarrollan una “hegemonía comunicacional” al servicio de la oposición, desarrollan su labor los profesionales de la comunicación, que ven afectados sus derechos tanto por funcionarios estatales como por agentes no estatales. Es claro que hoy en Venezuela, el ejercicio del periodismo dista de ser imparcial, objetivo y veraz, ya que los medios privados responden a una línea editorial asociada a intereses económicos y políticos mientras que los medios del Estado responden a una línea editorial orientada y manipulada por intereses políticos hegemónicos. Son pocas las honrosas excepciones a esta confrontación que busca imponer la “hegemonía comunicacional” de un sector en desmedro del derecho a la democratización de la información y la comunicación que reclama la sociedad.

Situación y casos regionales (Enero-marzo 2009)

Vale destacar que, en el plano regional¹⁰, la “hegemonía comunicacional estatal” se ha desarrollado copiando el modelo nacional: el gobernador cuenta con un programa televisivo semanal denominado “Tarek rinde cuentas”, de formato similar al “Aló Presidente”, habiendo logrado el apoyo de medios de comunicación regional que dependen de la pauta publicitaria estatal, así como da la gran mayoría de medios de comunicación alternativos que cuentan con el financiamiento oficial.

Esta situación había sido constatada anteriormente por el Instituto Prensa y Sociedad (IPYS) Venezuela, organismo que caracterizaba la situación en los siguientes términos: *“Apoyado en el sector financiero, el gobernador Saab, quien pertenece al partido de gobierno, MVR, se ha dedicado sistemáticamente a presionar a los medios de comunicación para que publiquen solo aquella información emanada de las oficinas de prensa gubernamental. ‘Si a algún medio se le ocurre publicar alguna información que no lo favorezca [...] enseguida ese medio se gana el desprecio del gobernador, y éste es capaz de dedicarle cuatro horas de su programa semanal para desprestigiar al medio y al periodista que escribió la noticia’ comentó Omar González, Director del vespertino El Nuevo Día”*.¹¹

Asimismo, el IPYS denunció en su oportunidad que: *“tanto a los periodistas de El Tiempo como a los de El Nuevo Día, el gobierno regional les ha impuesto*

un veto: no tienen acceso a la agenda de el gobernador; a los boletines emitidos por la gobernación o por el partido MVR, y algunos funcionarios públicos se niegan a emitirles declaraciones” así como que “la imparcialidad ya no existe, en la mayoría de los impresos, y son pocos los que manejan una agenda distinta a la que imponen desde la sede del gobierno regional [...] Hay mucho miedo a perder las pautas publicitarias del Ejecutivo”.¹²

Dos años después esta situación se ha agravado y profundizado como se desprende de la investigación realizada en esta oportunidad por Espacio Público, quien visitó la zona entrevistando a periodistas, reporteros gráficos, editores y directivos del Colegio Nacional de Periodistas de Puerto La Cruz y El Tigre, en la primera quincena de marzo del 2009. Directivos del CNP de las seccionales Puerto La Cruz y El Tigre manifestaron a Espacio Público su preocupación por la restricción al acceso a fuentes de información oficiales, la generalización de la autocensura generada por los despidos de periodistas críticos, las amenazas y presiones gubernamentales y las agresiones de efectivos policiales o militares y de partidarios del partido de gobierno y opositores al momento de cubrir noticias y eventos regionales. Señalaron que el gobierno regional avanza en lograr la “hegemonía comunicacional estatal” presionando a medios de comunicación que no son del Estado con la el acceso a las pautas publicitarias o comprando medios privados, que se realiza según el profesor Marcelino Bisbal: “*uno no sabe si es con apoyo de dinero proveniente del Estado o de algunos particulares que están haciendo negocios con el Gobierno y que son afectos a este proceso político*”.¹³

Existe coincidencia en los entrevistados en que algunos medios de comunicación “*que no se parcializan con las influencias mediáticas del mandatario regional, que domina casi todos los medios de comunicación impresos de Anzoátegui, a excepción del diario El Tiempo, ejercen una marcada imparcialidad y toman partido como organizaciones políticas, al ejecutar una marcada tendencia opositora de desaprobación de la gestión del gobierno regional, y no cubren las fuentes emanadas de la Gobernación.*”.¹⁴

Esta confrontación generada en el marco de la batalla por la “hegemonía comunicacional” genera efectos perversos y negativos sobre los propios profesionales de la comunicación social. Es común en la región, como también se presenta a escala nacional, que “*tanto partidarios oficialistas como opositores, cuando se ven en cercanía de algún evento noticioso a cualquier medio que no les es favorable, optan por agredir y atropellar a los profesionales de la información*”.¹⁵ El Ejecutivo regional contribuye a esta situación pues es

común que en sus alocuciones semanales en el programa “Tarek rinde cuentas” se dedique a atacar y desprestigiar a medios o periodistas que reseñen noticias que el mandatario considera que afectan su imagen o gestión.¹⁶ Han venido sucediéndose casos de despidos de periodistas de instancias oficiales, como el caso de Jacobo Vincent, trabajador de la Alcaldía de El Tigre y directivo del CNP de esa localidad, hecho ocurrido el pasado mes de diciembre. Cabe señalar que fuentes consultadas por Espacio Público dan cuenta de que la mayoría de los despidos no son denunciados por los afectados, pues entienden que de hacerlo se le cierran oportunidades de conseguir trabajo en el futuro.

En el período enero-marzo de 2009, según la investigación realizada por Espacio Público se registraron 16 casos de violaciones a la libertad de expresión e información, de los cuales 12 son comunicadores sociales (9 hombres y 4 mujeres) y 3 son medios de comunicación.

Entre los casos documentados destacan los siguientes:

Agresiones de agentes estatales:

Negación o restricción al acceso a la Información

La restricción al acceso a las fuentes oficiales de información es una política de estado en Anzoátegui. En Puerto La Cruz, directivos del CNP de esa seccional, aseguraron que el periódico *El Tiempo* y sus periodistas, así como *RCTV Internacional* son discriminados en el acceso a la información por parte del Gobierno regional. En el caso de *El Tiempo*, esta situación comenzó en el mes de julio de 2006, cuando el gobernador Saab acusó al periódico regional de orquestar una campaña para desprestigiar el sistema de salud del estado. El periódico realizó una investigación que develó que un paciente de 14 meses de edad adquirió el Virus de Inmunodeficiencia Adquirida (VIH) en el Hospital de Niños de Barcelona a través de una transfusión sanguínea realizada en dicho centro de salud. El gobernador lejos de ordenar una investigación y correctivos a la situación acusó a *El Tiempo* de manipular la información para desprestigiarlo. A partir de allí, la gobernación excluyó al periódico del acceso a las fuentes de información de la gobernación, incluso se ha negado a dar ruedas de prensa si se encuentran presentes periodistas de *El Tiempo*, situación que se mantiene hasta el presente, y acostumbra a realizar señalamientos públicos o amenazas veladas contra periodistas de este medio.

Según pudo constatar Espacio Público, este periódico es el único que no tiene pauta de publicidad oficial, y mantiene una línea informativa independiente respetando la política informativa de contraste de la información, lo que hace que tenga alta credibilidad y sea el más leído en todo el estado Anzoátegui.

En el caso de la población de El Tigre, el CNP de esa región denunció que *“desde el pasado mes de septiembre de 2008, el acceso a la información y las violaciones al libre ejercicio profesional, con ecuanimidad y veracidad, son los principales escollos por los cuales atraviesan los profesionales de la información en el sur de Anzoátegui”*.¹⁷ Más precisamente, el organismo gremial denuncia que: *“La restricción en el acceso a las fuentes se han evidenciado desde el gobierno del ex alcalde de El Tigre, Ernesto Paraqueima, cuando a un buen número de profesionales de la información se les impidió tener acceso a la fuente de la Alcaldía de Simón Rodríguez, porque simplemente los gerentes y directivos de las empresas de comunicación comulgan política y económicamente con la gestión del gobernador reelecto del Psv, Tarek William Saab”*.¹⁸

En el interior del estado Anzoátegui, según denuncias realizadas por el CNP-El Tigre *“es evidente en el caso de la televisora Órbita Televisión, y el diario Mundo Oriental, ambos medios de El Tigre, a cuyos reporteros no se les permite acceder a las instalaciones de la Alcaldía, ni mucho menos a la Cámara Municipal, por orden expresa del alcalde de Simón Rodríguez, Carlos Hernández, y el presidente de la Cámara Municipal de esta localidad, Assad Nakkour (cuñado del Gobernador T. Saab), quienes han colocado militares de la reserva en las entradas de los recintos municipales, para impedir a toda costa la entrada de los periodistas que pertenecen a estos dos medios de comunicación, acusándolos de ser contrarios al proceso revolucionario. Tanto Hernández como Nakkour han asumido actitudes hostiles contra algunos de los periodistas que les es permitido el acceso a sus ruedas de prensa, especialmente agresiones verbales que han sido asimiladas por los colegas, para evitar confrontaciones y así no perder esas fuentes de información”*.¹⁹

Agresiones por parte de efectivos policiales o militares

Caso Karla Gil/José González

En este caso los responsables de la agresión son agentes estatales, específicamente efectivos de la Guardia Nacional (GN). Los afectados fueron la periodista Karla Gil y el reportero gráfico José González, ambos

trabajadores del diario *Mundo Oriental*. Según el reporte del periódico consignado por José González a Espacio Público: “*El equipo cubría durante la mañana de ayer las incidencias de una tranca en la carretera nacional El Tigre-Ciudad Bolívar, que protagonizaron los conductores de diferentes empresas de transporte, debido al pésimo estado de la vía, la cual fue disuelta por un piquete adscrito al Destacamento 74 acantonados en San Tomé, municipio Freites*”.²⁰ González denunció que mientras tomaba gráficas de la actuación de la GN “*fue atacado por varios efectivos de este cuerpo de seguridad, quienes sin mediar palabras y pese a que él se identificó como trabajador de la prensa lo golpearon y de manera grosera le ordenaban que les entregara el equipo fotográfico, mientras que su compañera (Karla Gil) era retenida y empujada con los escudos antimotines*”.²¹

Caso Rafael Salazar

En otra situación Rafael Salazar, fotógrafo de *El Tiempo*, fue por efectivos de la Guardia Nacional mientras cubría una manifestación de estudiantes de la Universidad de Oriente. Los efectivos pretendieron que el fotógrafo les entregara el rollo de fotos, a lo que el afectado se negó, logrando luego de un fuerte reclamo que desistieran de su propósito.

Según el Círculo de Reporteros Gráficos de El Tigre en los dos últimos años siete (7) profesionales de la fotografía han sido atacados por los organismos de seguridad y por personas afectas al oficialismo y la oposición.

Agresiones de sectores no estatales:

Caso MCC (Ensambladora Mitsubishi)

El 29.01.09. en el marco de un procedimiento judicial ordenado por una comitiva de los tribunales I y II de Ejecución de Medidas del municipio Simón Bolívar en el que participaron 30 efectivos de Polianzoátegui, se produjo la muerte de dos obreros: José Javier Marcano Hurtado y Pedro Suárez Coito. Los obreros de la automotriz Mitsubishi ocupaban la planta automotriz desde el 12.01.09., reclamando por el despido de trabajadores y las condiciones laborales del sector. En un principio, Polianzoátegui negó que las muertes fueran responsabilidad de sus funcionarios, lo que posteriormente fue comprobado judicialmente por la Juez Quinto de Control que acusó a tres efectivos policiales por homicidio en grado de

cooperadores, complicidad co respectiva, frustrado en complicad y uso indebido de armas de fuego.

La cobertura periodística de los hechos posteriores a la muerte de los trabajadores generó consecuencias negativas para periodistas, fotógrafos y medios de comunicación. Los principales afectados fueron periodistas y fotógrafos del matutino *El Tiempo* y el corresponsal de *RCTV Internacional*. El 06.02.09. en su nota editorial el periódico oriental afirmó: “*En una reunión celebrada el 2 de febrero trabajadores de la ensambladora se mostraron agresivos con el equipo de E Tiempo; y al día siguiente, en una marcha, las hostilidades se exhibieron a través de empujones e intentos de golpes, por lo cual los comunicadores decidieron abandonar la manifestación*”.²²

Los comunicadores agredidos o amenazados por sindicalistas o trabajadores de MCC²³ fueron: Enler García (*RCTV*-corresponsal), Katy Jurado (*El Tiempo*-periodista), María Eugenia González (*El Tiempo*-periodista), Marlon Guzmán (*El Tiempo*-fotógrafo) y Lizardo Aguilar (*El Tiempo*-fotógrafo).

Enler García denunció a Espacio Público que fue víctima de abucheos y cánticos en contra del medio del cual es corresponsal por parte de trabajadores días previos a la muerte de los trabajadores cuando cubría el conflicto laboral. El día 29.02.09. cuando cubría la acción judicial nuevamente fue recibido con agresividad por los trabajadores en conflicto, y por el clima de violencia se retiró del lugar sin entrevistar a los actores del conflicto. Al día siguiente, al hacerse presente en la morgue judicial donde se realizaba la autopsia de los trabajadores asesinados, fue recibido por los trabajadores presentes con amenazas verbales (“te vamos a matar”, “ponte el chaleco antibalas”), y con posterioridad sufrió un intento de agresión física, por lo que optó por retirarse del lugar.

Fue citado por la Fiscalía como testigo de los hechos que culminaron con el asesinato de los dos trabajadores de MCC, oportunidad en que denunció las amenazas de muerte recibidas, así como el intento de agresión física por parte de los trabajadores y solicitó se investigue y sancione a los responsables. A partir de esa fecha, *RCTV* no cubre los hechos relacionados con el caso, para proteger la integridad física de su corresponsal.

Daniel Olivares, fotógrafo de *El Tiempo*, fue golpeado por trabajadores que se hicieron presentes en la morgue judicial, por lo que tuvo que retirarse del lugar. Lizardo Aguilar, del mismo periódico, fue amenazado por los

trabajadores de MCC cuando intentó tomar fotos de la marcha realizada con posterioridad al asesinato de los trabajadores.

El fotógrafo Marlon Guzmán, quien cubrió los sucesos de los trabajadores de la automotriz MCC, a raíz de que fue citado como testigo de los hechos por el tribunal que investiga la causa fue amenazado de muerte y agredido por una persona armada con arma de fuego. Esta persona lo abordó y lo increpó por haber declarado en la causa con epítetos agresivos hacia su persona. Como consecuencia de esta situación, Guzmán en común acuerdo con la directiva de *El Tiempo*, fue trasladado a la oficina de dicho periódico ubicada en Caracas, como medida de protección de su vida e integridad física.

Caso Marilind Marcano

La periodista y corresponsal de *El Tiempo* en la población de El Tigre, Marilind Marcano, denunció a Espacio Público que a raíz de su trabajo profesional ha sido en reiteradas ocasiones agredida verbalmente por personas afectas al gobierno cuando cubre hechos que los involucra. Adicionalmente, manifestó su preocupación porque al menos en una oportunidad en el mes de marzo de 2009, se ha tenido que retirar de lugares públicos donde ha sido identificada realizando gestiones de la vida cotidiana, por temor a ser agredida y que se generen situaciones violentas.

Censura y despidos

Caso Nueva TV/Alex Almeida

En ocasión del referéndum por la enmienda de la Constitución realizado en febrero del 2009, el productor independiente Alex Almeida quien producía un programa entrevistas en *Nueva TV*, donde se entrevistaba alternativamente personas con diferentes puntos de vistas sobre problemas de la realidad regional, fue despedido y cerrado su programa “por órdenes del gobernador”²⁴ quien le manifestó al director de ese medio televisivo que recibe pauta publicitaria oficial su desagrado con la presencia de opositores en el programa.

Caso Antorcha TV / Juan Guatache / Aurimel González

El 15.02.09, en ocasión de la jornada electoral del referéndum por la enmienda de la Constitución, los periodistas Juan Guatache y Aurimel González realizaron la cobertura televisiva de dicho evento, en el que se produjo un incidente electoral que involucró al gobernador Tarek W. Saab. En el momento posterior a la emisión del voto, el gobernador Saab rompió la boleta electoral delante de las cámaras televisivas y solicitó emitir su voto nuevamente. Este hecho calificado por la normativa electoral como un delito, se convirtió en la noticia del momento, lo que motivó a los periodistas Guatache y González a recoger opiniones en vivo de los televidentes, quienes opinan sobre el hecho. Para sorpresa de los periodistas, la señal del canal se cayó en varias oportunidades, por lo que presentaron sus reclamos al operador de turno a quien identificaban como partidario del oficialismo. Paralelamente, comenzaron a recibir llamadas telefónicas insultantes de partidarios del gobernador regional, a lo que hicieron caso omiso. Cabe señalar que las opiniones de los televidentes estaban divididas y salían alternativamente al aire, respetando la política de equilibrio informativa del programa.

Al día siguiente, ambos periodistas fueron despedidos sin justificación alguna, por lo que reclamaron a los propietarios del canal, quienes no les dieron explicación alguna. Informaciones posteriores recogidas por los periodistas despedidos dan cuenta que a comienzos del año *Antorcha TV* había recibido apoyo de equipos para la planta de parte de la gobernación.

Denuncias de violaciones a la libertad de expresión e información (estado Anzoátegui). Enero-marzo 2009

Nº	N.N.	LUGAR	SÍNTESIS DE LOS HECHOS	VIOLACIÓN	Responsable
1	Enler, GARCÍA (RCTV)	PLC	Por cubrir el conflicto de MCC Automotriz sufrió amenazas y agresiones.	Amenaza, agresión.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
2	María Eugenia GONZÁLEZ (ET)	PLC	Por cubrir el conflicto de MCC Automotriz sufrió amenazas.	Amenaza.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
3	Marlón GUZMÁN (ET)	PLC	Por declarar en el juicio de los trabajadores asesinados de MCC Automotriz fue amenazado de muerte.	Amenaza.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
4	Lizardo, AGUILAR (ET)	PLC	Por cubrir el conflicto de MCC Automotriz sufrió amenazas.	Amenaza.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
5	Katy, JURADO (ET)	PLC	Por cubrir el conflicto de MCC Automotriz sufrió amenazas.	Amenaza.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
6	Daniel, OLIVARES (ET)	PLC	Por cubrir el conflicto de MCC Automotriz sufrió agresiones.	Agresión.	Presuntos simpatizantes del gobierno.
7	Rafael, SALAZAR (ET)	PLC	Cubriendo una manifestación efectivos policiales intentaron decomisarle las fotos tomadas.	Intento decomiso de rollo de foto	Policía estatal.
8	EL TIEMPO	PLC	Gobernación le niega el acceso a las fuentes oficiales de información.	No acceso a fuentes oficiales de información.	Gobierno estatal.
9	Jesús, RINCON	ET	Fue presionado y finalmente renunció a su empleo en la Cámara Municipal de El Tigre.	Censura Discriminación	Gobierno municipal.
10	Alex, ALMEA (NTV)	ET	Fue despedido de Nueva TV y clausurado su programa de entrevistas.	Censura Discriminación	Empresa privada.
11	José, GONZÁLEZ (MO)	ET	Fue detenido y esposado mientras tomaba foto de una manifestación reprimida.	Detención arbitraria	Guardia Nacional
12	Juan, GUATACHE (ATV)	ET	Fue censurado y despedido por contenido crítico de la cobertura del referendo por la enmienda constitucional.	Censura Discriminación	Empresa privada.
13	Aurimel, GONZALEZ (ATV)	ET	Fue censurada y despedida por contenido crítico de la cobertura del referendo por la enmienda constitucional.	Censura Discriminación	Empresa privada.
14	MUNDO ORIENTAL	ET	Alcaldía y Cámara Municipal le niega el acceso a las fuentes oficiales de información.	No acceso a fuentes oficiales de información.	Gobierno municipal
15	ANTORCHA TV	ET	Alcaldía y Cámara Municipal le niega el acceso a las fuentes oficiales de información.	No acceso a fuentes oficiales de información.	Gobierno municipal
16	Marilind MARCANO	ET	Fue agredida en la vía pública mientras realizaba gestiones personales por personas afectas al oficialismo.	Agresión	Presuntos simpatizantes del oficialismo.

Notas

- 1 Informe realizado por Raúl Cubas, revisión de Carlos Correa. Este reporte se realiza como parte de las actividades de la Comisión Nacional de Protección de los Derechos Humanos de los Periodistas (CONAPRO), una iniciativa del Colegio Nacional de Periodistas, en la que participan el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTTP), Círculo de Reporteros Gráficos de Venezuela (CRGV) y Espacio Público.
- 2 http://politica.eluniversal.com/2007/05/28/pol_art_bisbal-senala-que-se_301470.shtml
- 3 http://www.boletin.uc.edu.ve/index.php?option=com_content&task=view&id=4990&Itemid=38
- 4 Aclaración del redactor.
- 5 *Ídem* anterior.
- 6 El Universal: <en línea> http://politica.eluniversal.com/2007/05/28/pol_art_bisbal-senala-que-se_301470.shtml Consulta del 29.03.09.
- 7 <http://www.aporrea.org/imprime/a37573.html>
- 8 *Ídem*.
- 9 *El Universal*: *Ídem*.
- 10 El estado Anzoátegui, estado ubicado en el oriente venezolano, cuenta con un elevado número de medios de comunicación impresos (12 periódicos regionales), radiofónicos y audiovisuales.
- 11 IPYS Venezuela: *Boletín Informativo Quincenal* N° 32. 21.07.06.
- 12 *Ídem*.
- 13 http://politica.eluniversal.com/2007/05/28/pol_art_bisbal-senala-que-se_301470.shtml
- 14 CNP El Tigre: *Ibíd.*
- 15 *Ídem*.
- 16 Como ejemplo de las denuncias conocidas, en el programa “Tarek rinde cuentas” N° 175 de febrero de 2009, según el secretario general del partido Vanguardia Popular Robin Rodríguez, el gobernador Saab utilizó un *léxico “soez, vulgar y ofensivo, en pleno horario restringido, mediante el cual se violó la Ley Resorte en toda su plenitud”*.
- 17 CNP El Tigre, en comunicación enviada a Espacio Público, em fecha 29.03.09.
- 18 *Idem*.
- 19 CNP El Tigre, en comunicación enviada a Espacio Público, en fecha 29.03.09.

- 20 *Mundo Oriental*: CNP El tigre condena agresión a reportero gráfico. 05.02.09.
Pág. 4.
- 21 *Ídem*.
- 22 *El Tiempo*: Editorial, ¿Quién pierde? 06.02.09.
- 23 Según declaraciones coincidentes de los afectados la mayoría de los trabajadores de MCC responden
- 24 Entrevista concedida a Espacio Público, el 18.03.09.